

UNA LECTURA DE LA COYUNTURA NACIONAL Y CHIAPANECA

GUSTAVO CASTRO SOTO
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO; 11 DE JULIO DE 2001

En San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, con fecha del 14 de junio del 2001, Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), instancia de análisis y reflexión de algunas personas que formaron la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) y otros asesores y colaboradores cercanos, elaboró un documento fruto de la reflexión interna. Dicho documento titulado "Notas hacia una nueva estrategia" fue luego difundido en la prensa nacional. Este documento lo reproducimos y lo comentamos para entender su contexto. Los paréntesis son comentarios y observaciones nuestras. El documento plantea 8 puntos:

1.- Los escenarios nacional y local (en Chiapas) han cambiado aceleradamente a partir de la aprobación de la (contra) reforma sobre derechos indígenas en el Congreso de la Unión; este hecho marcó el fin de una etapa. (En esta contrarreforma legislativa se eliminó de la discusión la iniciativa de la Ley Cocopa para imponer la de los senadores del PRI y PAN: la Ley Bartlett-Cevallos). Con la nueva suspensión del proceso hacia el diálogo entre el EZLN y el Gobierno Federal se abre otra, más grave, caracterizada por explicitar la incapacidad de la vía política para resolver las causas de fondo del conflicto, por el aceleramiento de la tendencia al deterioro en la convivencia política y social, así como el ensanchamiento de la polarización de posturas y actores. Es urgente releer el momento actual desde una visión estratégica que permita establecer las definiciones y acciones necesarias para frenar estas tendencias y reorientar el proceso de Paz.

(¿De qué sirve dialogar, llegar a acuerdos políticos para construir la Paz entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el EZLN, si luego, argumentando independencia en las decisiones de los Poderes, contradicen lo acordado y reformulan una propuesta contradictoria a lo negociado? La vía de negociación que tanto costó al país fue borrada como la salida política para solucionar el conflicto).

2.- El triunfo de la Alianza por Chiapas el 20 de agosto (del año 2000) y el comportamiento del gobierno electo (de Pablo Salazar Mendiguchía) con el proceso de Paz; la decisión estratégica del gobierno federal de generar las condiciones que permitieran la reanudación del diálogo; la estrategia del EZLN para llevar a la arena política la disputa de condiciones para la solución del conflicto, así como el enorme respaldo social que la Marcha por la Dignidad logró (durante febrero y marzo) para las demandas indígenas y para la vía pacífica: fueron signos positivos que generaron grandes expectativas en amplios sectores de la sociedad nacional y chiapaneca en la perspectiva de avanzar en:

- La solución política de las causas del conflicto.
- El impulso de un verdadero proceso de democratización.
- Las condiciones para la generación y promoción de alternativas económicas y sociales que permitieran mejorar las condiciones de vida y trabajo de las comunidades.
- Un ánimo renovado y la esperanza de un futuro mejor.

3.- Sin embargo la clase política de la sociedad no logró comprender el momento político, el vínculo entre el proceso de Paz y la Reforma del Estado, ni asumir su responsabilidad histórica.

Así, el 28 de abril este contexto se modificó radicalmente, pues el fracaso de la recuperación de credibilidad y de condiciones para el diálogo, y con ello el propio proceso de Paz, entraron en una profunda crisis. (El Congreso de la Unión aprobó la Ley Bartlett-Cevallos sin el consenso de todos los partidos ni de la sociedad. Contrariamente, se mostró el apoyo social a la Ley Cocopa durante la marcha de los zapatistas hacia la Ciudad de México. Los legisladores de todos los partidos políticos que conforman la Comisión de Concordia y Pacificación -COCOPA- no defendieron su propuesta; y el presidente Vicente Fox, como Pilatos, se lavó las manos y responsabilizó a los partidos en el Congreso de no aceptar la Ley Cocopa que hizo suya).

4.- Algunos rasgos del nuevo escenario recogidos desde una extendida percepción popular en Chiapas, son los siguientes:

- La multiplicación de denuncias y protestas de organizaciones y comunidades por la creciente presencia militar y policiaca en diferentes regiones. (Los soldados se movieron a unos kilómetros de los puestos que el EZLN demandaba dismantelar, y han continuado los hostigamientos y patrullajes en las comunidades indígenas. Por otro lado, si bien el Gobernador Pablo Salazar ha retirado algunos puestos policíacos en las comunidades, la actuación represiva de la policía se sigue manifestando durante los primeros 7 meses de su gobierno).

- Las reiteradas denuncias sobre la reactivación de grupos paramilitares particularmente en la Zona Norte (de Chiapas. Además, paramilitares de Paz y Justicia fueron puestos en libertad durante el presente año).

- La percepción de que no se han tomado las medidas necesarias que dentro de las competencias estatales se requieren para frenar la paramilitarización y hacer justicia. (Tanto el gobierno federal como el estatal dicen que no es su problema hasta que la otra parte de instrucciones. Mientras tanto, no hay un preso paramilitar más, y ninguna arma incautada).

- La percepción de que no se ha tomado las medidas de justicia necesarias que, dentro de las competencias estatales, se requieren para frenar la polarización producto de la paramilitarización y otros abusos.

- La aplicación de políticas y programas oficiales con esquemas del régimen anterior que contribuyen a la división y confrontación de organizaciones y comunidades.

- La percepción de que el gobierno estatal se ha sintonizado con la política económica pro-empresarial del gobierno federal, particularmente en el caso del apoyo al Plan Puebla Panamá que representa una amenaza a los derechos de los pueblos indígenas y en general a la producción y propiedad social. (Las declaraciones del gobernador a favor del Plan Puebla Panamá han mostrado irritación en los sectores y organizaciones que han planteado críticas y desacuerdos. Entre ellos están los sectores académicos, las organizaciones civiles, campesinas e indígenas).
- La desarticulación y diferenciación de las organizaciones (indígenas, campesinas,) sociales y civiles en torno a la relación que deben establecer con el gobierno estatal en términos de colaboración o resistencia, generando un nuevo campo de confrontación y polarización.
- Que en estas condiciones de división e incertidumbre, hay alto riesgo de que en la próxima contienda electoral las posturas y actores más conservadores logren reposicionarse en el Congreso Local y en los gobiernos locales, generando una correlación política que obstaculice los procesos de cambio democrático y las condiciones para reorientar la paz. (Tal es el caso de los grupos o familias caciquiles locales, ganaderos que reclaman a Pablo Salazar la recuperación de sus tierras y para lo cual ha creado un grupo especializado de policías para el desalojo de tierras tomadas por campesinos e indígenas. Esto también ha llevado a una polarización entre dichas organizaciones con sus líderes que ahora son funcionarios del nuevo gobierno).
- Que la aprobación de la reforma indígena genera una creciente distancia y desconfianza de la sociedad hacia los marcos políticos institucionales y favorece la radicalización de las formas de lucha.
- Que la política de reconciliación impulsada por el gobierno estatal en tanto no se orienta a la solución de causas y aplicación de justicia genera nuevas situaciones conflictivas que de manera abierta o latente se mantienen en las comunidades. (Una política de supuesta reconciliación que pase por encima de la aplicación de la justicia para las víctimas y castigo a los culpables dejará latente el problema en las regiones. Si el gobierno anterior de Albores Guillén ofrecía amnistía a los paramilitares, dinero y semillas a cambio que entregaran las armas, el funcionario gubernamental actual de la reconciliación ofrecía lo mismo pero sin recoger las armas. Esta política de reconciliación poco a ayudó a generar credibilidad en las acciones y promesas de nuevo gobierno).
- Que la suspensión del diálogo y la polarización de las Partes a nivel nacional (EZLN y gobierno federal) ha regresado al ámbito local las tensiones del conflicto, generando un acelerado proceso de deterioro.
- Que la situación actual de debilidad de gobierno federal frente a la sociedad política, cuya prioridad está en otras agendas (como la reforma fiscal para el aumento de los impuestos y otras medidas de privatización que exige el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Vicente Fox por el endeudamiento externo), lo ha llevado a renovar la alianza con el Ejército mexicano, lo que está planteando un peligroso retorno a la estrategia aplicada durante el sexenio de (Ernesto) Zedillo: contención con actores locales de violencia y el impulso del "desarrollo si negociación y sin Paz", haciendo del gobierno estatal actor directo y parte principal del conflicto. Urge

una nueva estrategia de Estado hacia la Paz con base en una valoración justa del conflicto, sus retos y riesgos.

5.- La aprobación definitiva de la (contra) reforma constitucional (sobre la ley indígena) por 16 legislaturas locales será el parteaguas para que se exprese abiertamente lo que se ha estado gestando desde el 28 de abril: una crisis total.

Entre los datos de un próximo escenario viable destacan:

- * La radicalización del EZLN, de diversos sectores sociales y de otras expresiones armadas (en muchos otros estados del país), ante la evidencia de la inviabilidad de los espacios institucionales para solucionar las causas del conflicto.
- * La debilidad de los actores sociales y civiles de Paz para generar nuevas iniciativas capaces de frenar el deterioro y los riesgos de un escalamiento del conflicto, y de abrir nuevas alternativas al proceso de Paz.
- * La deslegitimación de los actores partidarios y en general de la sociedad política, así como la falta de liderazgos políticos y de vínculo con los procesos sociales. (Esto impactará definitivamente en el proceso electoral próximo del 7 de octubre cuando se elegirán nuevas autoridades para los 111 municipios de Chiapas, más de 80 en manos del PRI, y el total del Congreso Local compuesto por 40 diputados de los cuales la mayoría de los curules actualmente son del PRI).
- * Nuevas formas de expresión y lucha del movimiento indígena a través del impulso de autonomías de hecho.
- * En síntesis, los rasgos que se identifican para la nueva etapa son de:

- + Creciente polarización política y social.
- + Pérdida de confianza en el gobierno local y en el proyecto de transformaciones políticas, económicas y sociales.
- + Nuevos elementos de disputa y campos de confrontación.
- + Expresiones radicales y violentas de lucha para modificar las condiciones actuales.
- + Desarticulación, fragmentación y división de las fuerzas políticas, sociales y civiles que han contribuido en la construcción de la Paz.
- + El reciclamiento de la estrategia gubernamental de atender causas, sin diálogo y sin cauces para el proceso de Paz.

6.- Ante estas perspectivas se abren diversas opciones estratégicas, pero sin posibilidad al corto plazo. Hoy es difícil pensar en que las Partes modifiquen su estrategia, o en que otros actores tengan la claridad, cohesión y fuerza para mover el escenario. Por ello, el gobierno del estado puede y debe ser el factor que genere de inmediato una nueva situación más propicia al encauzamiento político del proceso de Paz.

Los tiempos políticos y las opciones se han reducido. La polarización comienza a ahogar las expectativas. La pérdida acelerada de credibilidad y de Esperanza hacen pensar en la urgencia de una nueva postura pública sobre el proceso de conjunto. No

bastará el salto cualitativo del Gobernador, pero el suyo es necesario para propiciar la maduración y cambio de otros actores, incluido el Gobierno Federal.

7.- (El gobernador de Chiapas) Pablo Salazar está ante la última oportunidad y la delicada responsabilidad de replantear su estrategia de Gobierno en términos de contribuir efectivamente al establecimiento de nuevas condiciones y apertura de espacios y canales para dirimir la conflictividad social y política que está por estallar.

Requiere para ello de asumir una postura clara ante las opciones de:

- Convertirse en el actor local de la Parte gubernamental, definido en el marco de la estrategia federal.
- O proponer una estrategia alternativa desde una visión integral y nacional del conflicto que se exprese claramente en el marco de sus capacidades y competencias locales.

Sólo vemos congruente la segunda opción, un viraje estratégico que implica:

- Retomar de manera incuestionable en el discurso y sus diversas acciones a los criterios planteados previamente desde la campaña y al inicio del ejercicio de gobierno. Es decir, una política de reconciliación y desarrollo que contribuya a construcción de los actores y condiciones que requiere la Paz. Nada que polarice, nada que no aporte a la Paz; que toda política social o de reconciliación se oriente a solucionar las causas profundas del conflicto sobre la base de reconstruir el tejido social y de impulsar la participación y articulación política, etc.
- Recuperar el liderazgo a la Esperanza la confianza social, asumiendo una serie de definiciones políticas sustanciales en torno a las cuestiones vitales de la agenda social que de manera clara orienten la acción del gobierno en todos sus ámbitos y niveles. Es necesario dar señales precisas de que se avanza en un proyecto democrático, de justicia, con pleno respeto a los derechos humanos, particularmente a los derechos indígenas. El mejor servicio al pueblo está en rehacer el camino de la Paz, escapando de las inercias, las provocaciones y las trampas del camino.
- Promover nuevos espacios de interlocución en las distintas dimensiones, comunitario, regional y estatal que permitan múltiples interlocutores y alianzas con los actores del cambio democrático. Priorizar en este sentido la alianza con los sectores sociales e indígenas del estado.
- Etc.

8.- Finalmente, ratificamos nuestra voluntad de servicio a la Paz justa y digna, y nos preparamos también para realizar los ajustes de fondo que la nueva situación reclama."

Hasta aquí el diagnóstico de Serapaz. Cabe señalar que para el gobernador Pablo Salazar el reto es complicado. Se encuentra entre dos fuegos: el plan político y económico del presidente Vicente Fox o las demandas de los pueblos indígenas, campesinos y otros sectores populares. Al parecer, Salazar puede tomar acciones para lograr cambios políticos en Chiapas. Se ha enfrentado fuertemente a la mayoría de los

medios de comunicación que vivían de fondos públicos y corrupciones. Ha modificado las políticas y contenidos de los noticieros de la televisión y la radio. Se ha enfrentado con los priistas del Congreso Local para evitar que continúen con sus corruptelas al igual que con el Poder Judicial llena de vicios. Liberó a los presos zapatistas del fuero común, aunque todavía se reclaman otros.

Sin embargo, pesa sobre él las demandas sociales y las promesas de campaña en torno a la solución al problema de los paramilitares, las tierras, las acciones represivas que ha tomado la policía en lo que va del año, el retorno de los desplazados; las reformas necesarias para mejorar la procuración de justicia, acabar con la impunidad y la pésima acción los Ministerios Públicos.

Pablo Salazar también se encuentra en el dilema de solucionar problemas económicos que son de carácter federal, como lo es la negociación con el EZLN. Esto es, el conflicto actual de los productores de caña de azúcar en Chiapas es un reflejo de la crisis nacional, la corrupción de los empresarios y de la apertura que ofreció el gobierno federal a la alta fructuosa de los Estados Unidos, dulce de maíz transgénico que está acabando con el mercado del azúcar de caña. Aunque hay otros problemas políticos relacionados con la explotación de los cañeros por parte de los caciques de la región de Pujilic, como es la familia Orantes, demandas que han hecho los cañeros al gobierno de Salazar y no encuentran atención.

Otro de los graves problemas es la baja de los precios del café que mantienen en crisis a miles de indígenas y productores de Chiapas. La apertura comercial y la liberación de los precios al mercado internacional no sólo ha llegado al café sino al maíz. El gobierno federal liberó los precios del maíz, de la tortilla y privatizó las bodegas de Conasupo que compraba y distribuía los granos básicos en el marco del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. También permitió la introducción de millones de toneladas de maíz de los Estados Unidos desprotegiendo al campo mexicano. Sin embargo, Pablo Salazar se congratula de que en algunas regiones del estado los productores de maíz están alcanzando una producción de entre 8 a 10 toneladas por hectárea.

Lo que quizás no sabe, es que las empresas transnacionales como Monsanto, Novartis, Pioneer, entre otros, que controlan las semillas y el mercado de agroquímicos en el mundo, están ofreciendo paquetes tecnológicos con su semilla patentada y más agrotóxicos, para que los productores entreguen más toneladas de maíz por hectárea a la empresa privatizada de Maseca, con menores ganancias relativas para el productor. Esta producción no lo podrán hacer en pocos años por el detrimento de la calidad de la tierra por tanto agroquímico. En esas regiones, los campesinos ya no cuentan con maíz criollo y la soberanía alimentaria se está perdiendo si los indígenas y campesinos no protegen sus semillas. Por otro lado, la empresa Maseca ubicada en Chiapas compra hasta tres veces más toneladas de maíz a los Estados Unidos que a los productores chiapanecos.

Al gobernador de Chiapas no le ayuda bailar al son que le marque el Presidente Vicente Fox para apoyar el Plan Puebla Panamá, y de quien depende para el apoyo y canalización de recursos federales para diversos proyectos. No puede tampoco deslindarse de la presencia del Banco Mundial y otros organismos multilaterales. Aparecer vestido de indígena con el bastón de mando de las autoridades de algunas etnias junto a Vicente Fox en los medios de comunicación, recuerda los viejos usos del entonces Presidente Ernesto Zedillo y el gobernador interino Albores Guillén. O con el embajador de Israel o de otros países de la Unión Europea. Se le ve menos en las asambleas de las organizaciones indígenas y campesinas quienes también tienen propuestas que se han formulado desde hace mucho tiempo y que no son nuevas. Las demandas, las propuestas, las alternativas han aparecido en desplegados de los periódicos, en pronunciamientos y declaraciones, en cartas y pancartas en las calles cuando la sociedad se ha manifestado. En la demanda de los presos indígenas injustamente encarcelados. No se parte de cero. Las voces han hablado desde hace mucho tiempo.